

**JUNIO 22 DE 1939**

**9ª REUNION — 8ª SESION ORDINARIA**

**Presidencia del doctor RAMON S. CASTILLO,**  
**Vicepresidente de la Nación;**  
**y del doctor MATIAS G. SANCHEZ SORONDO,**  
**Vicepresidente del Senado**

**Senadores presentes:** Alberto Arancibia Rodríguez, Mario Arenas, Herminio Arrieta, Ricardo Caballero, Raúl Ceballos Reyes, Juan Cepeda, Atanasio Eguiguren, Francisco R. Gálíndez, Manuel García Fernández, Héctor González Iramain, Laureano Landaburu, Eduardo Laurencena, Lucio López Peña, José Heriberto Martínez, Alfredo L. Palacios, Robustiano Patrón Costas, Jorge J. Pinto, Guillermo Rothe, Matías G. Sánchez Sorondo, Antonio Santamarina, Carlos Serrey, Juan R. Vidal, Benjamín Villafañe.

**Senador ausente, con aviso:** Juan José Lubary.

**Senadores ausentes:** Aldo Cantoni, Juan B. Castro, Alberto Francisco Figueroa, Gilberto Suárez Lago.

**SUMARIO**

**1.—Asuntos entrados:**

**Mensajes del Poder Ejecutivo:**

- I.—Acusando recibo de la nota por la que se le comunica el acuerdo prestado a dos miembros del directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
- II.—Acompañando copia del decreto por el que se concede pase a las bulas en que se instituye obispo de Mercedes, a monseñor Serafini.

III.—Comunicación de la Cámara de Diputados.

IV.—Constitución de comisiones.

V.—Peticiónes.

2.—Licencias.

3.—Proyecto de ley del senador Vidal y otros senadores, por el que se acuerda pensión a la señora María de la Precilla de Gil.

4.—Proyecto de resolución del senador Sánchez Sorondo, invitando a la Cámara de Diputados a realizar una sesión de Asamblea en homenaje del presidente electo del Paraguay, general José Félix Estigarribia. Se aprueba.

5.—A indicación del senador Palacios, se inserta en

Junio 22 de 1939

CAMARA DE SENADORES

9ª Reunión. 8ª Sesión Ordinaria

el *Diario de Sesiones* una nota del doctor Raffo de la Reta, aclaratoria del proyecto de ley relativo a la profilaxis del bocio.

6.—El senador Eguiguren solicita pronto despacho para un proyecto de ley, de que es autor, relativo a accidentes del trabajo a los obreros del campo.

7.—A indicación del senador Eguiguren, se reitera un pedido de informes al Poder Ejecutivo, sobre el régimen autónomo de las empresas de ómnibus de la Capital. Se aprueba.

8.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación General, en el proyecto de ley, en revisión, por el que se crea la Caja de jubilaciones y pensiones de periodistas. Queda pendiente su consideración.

9.—**Apéndice:** Inserción solicitada por el senador Palacios.

—En Buenos Aires, a los veintidós días del mes de junio de 1939, siendo la hora 16 y 45 minutos, dice el

**Sr. Presidente.** — Queda abierta la sesión.

## 1

## ASUNTOS ENTRADOS

**Sr. Presidente.** — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

## I

Mensaje del Poder Ejecutivo acusando recibo de la nota del Honorable Senado, por la que se le comunica el acuerdo prestado al ingeniero Agustín Rosas y al doctor Santiago B. Zacheo, como miembros del directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. (*Al archivo.*)

## II

—Se lee:

Buenos Aires, junio 9 de 1939.

*Al Honorable Senado de la Nación.*

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad, acompañando una copia legalizada del decreto número 144, (P. 33.689), dictada en la fecha por intermedio del Departamento de Relaciones Exteriores y Culto, por el que, de conformidad con el dictamen número 496 del 2 del corriente, se concede el pase a las bulas expedidas en Roma, con fecha 18 de marzo próximo pasado, por Su Santidad Pío XII, insti-

tuyendo obispo de la Diócesis de Mercedes a su excelencia monseñor Anunciado Serafini, quien fué oportunamente presentarlo a la Santa Sede, de acuerdo a la terna votada por vuestra honorabilidad.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

ROBERTO M. ORTIZ.  
*José María Cantilo.*

—Al archivo.

## III

## Comunicación de la Cámara de Diputados

Nota informando que ha designado a los señores diputados Caffarata, Muniagurria, de Iriando, Montagna y Barrau para formar parte de la Comisión Parlamentaria encargada de estudiar los proyectos sobre vivienda popular y para combatir la denatalidad. (*Al archivo.*)

## IV

## Constitución de comisiones

La Comisión Especial Parlamentaria para el estudio de los proyectos sobre vivienda popular y para combatir la denatalidad, comunica que se ha constituido, designando presidente al senador Martínez y secretario al diputado Montagna. (*Al archivo.*)

—La Comisión de Higiene y Asistencia Social comunica que se ha constituido, designando presidente al senador Serrey. (*Al archivo.*)

## V

## Peticiones

El Círculo de la Prensa, de Rosario, solicita la sanción del proyecto de ley, en revisión, sobre jubilación de periodistas. (*A sus antecedentes.*)

—El personal administrativo del diario «La Nación», Editorial Atlántida, diario «Noticias Gráficas» y Empresa Haynes, formula observaciones al proyecto de ley, en revisión, sobre jubilación de periodistas. (*A sus antecedentes.*)

—La Unión Industrial Argentina formula observaciones al proyecto de ley de los senadores Serrey y Patrón Costas, sobre construcción de obras de embalse en La Merced, provincia de Salta, y al del senador Palacios sobre creación de la caja de fomento de la natalidad. (*A sus antecedentes.*)

—Auristela Carbóñez, solicita que el Senado se pronuncie sobre el alcance del beneficio que le acuerda la ley número 12.500. (*A la Comisión de Negocios Constitucionales.*)

—El Club Argentino de Mujeres solicita autorización para la erección de un busto de Alfonsina Storni. (*A la misma.*)

—La Comisión de Homenaje al ex gobernador de Santa Fe, don Domingo Cullen, solicita la adhesión del Senado en la conmemoración del primer centenario de su muerte. (*A la misma.*)

## 8

**JUBILACION DE PERIODISTAS. — CONSIDERACION**

**Sr. Presidente.** — Al orden del día.

—Se lee:

## I

**Despacho de la comisión**

*Honorable Senado:*

Vuestra Comisión de Legislación General ha estudiado el proyecto de ley que ha enviado, en revisión, la Honorable Cámara de Diputados, por el que se crea la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Periodistas; y, por las razones que expone el senador informante, os aconseja su sanción.

Sala de la comisión, junio 9 de 1939.

*Carlos Serrey. — Laureano Landaburu. — Alfredo L. Palacios.*

**Proyecto de ley en revisión****PROYECTO DE LEY**

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Créase la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Periodistas, para el personal de las empresas establecidas en el territorio de la República y que reúnan los requisitos exigidos por la presente ley.

Art. 2º — La afiliación a la Caja es obligatoria para toda empresa o persona que prepare o publique por su cuenta, diarios, periódicos o revistas de información general, ilustrada o escrita, o empresa noticiosa radicada en el país, que tenga por única finalidad el suministro de informaciones y que acrediten un funcionamiento regular y continuado.

Art. 3º — Quedan comprendidos en esta ley:

- a) Todas las personas encargadas de la dirección, redacción y administración de las publicaciones, incluyendo directores, administradores, redactores, cronistas, noticieros, informantes, traductores, archiveros, corresponsales a sueldo en el país, contadores, cajeros, auxiliares, fotógrafos, dibujantes, correctores y, en general, los empleados que realicen una función regular para los servicios específicos del comentario e información y la administración de las publicaciones en su sede principal o en sucursales y agencias;
- b) Los corresponsales argentinos de publicaciones comprendidas en esta ley, que perciban sueldo y residan en el extranjero;
- c) Los directores, administradores, redactores, cronistas, noticieros, traductores y auxiliares de las empresas informativas;

- d) El personal radicado en el país, de empresas que tengan como finalidad el suministro de material informativo o de ilustración a la prensa;
- e) El personal de la Caja que se crea por esta ley;
- f) El periodista que es a la vez propietario puede acogerse a esta ley siempre que, conforme a lo establecido, cumpla con el doble aporte en su carácter de empresa y periodista.

Art. 4º — Se consideran empleados a los efectos de la presente ley, a las personas mayores de 18 años que presten servicios a las órdenes directas de las empresas a que se refiere los artículos anteriores y que perciban algún sueldo fijo o una remuneración en relación a sus servicios y que hagan del periodismo su profesión habitual.

**Fondos de la Caja**

Art. 5º — El capital de la Caja, se formará:

- a) Con el descuento obligatorio mensual del 7 % sobre el sueldo o remuneración del periodista y empleado, a que se refiere el artículo 3º. Dicho descuento se hará efectivo hasta la cantidad de \$ 1.000 moneda nacional, mensuales. En los sueldos o remuneraciones mayores de esa suma, no se efectuará descuento sino hasta dicha cantidad;
- b) Con el importe del primer mes de sueldo que se asigne al empleado a su ingreso en los establecimientos a que se refiere la presente ley, que será abonado en 24 cuotas mensuales.

Los empleados actuales aportarán a la Caja el importe de un mes de sueldo que gozaren al sancionarse esta ley, en 36 cuotas. Se considera como sueldo máximo la suma de \$ 1.000 moneda nacional;

- c) Con la diferencia del primer mes de sueldo cuando el empleado perciba un aumento;
- d) Con la contribución obligatoria de las empresas igual al 3 ½ % de los sueldos y remuneraciones de sus empleados, comprendidos en esta ley, y, considerando, a este efecto, un sueldo máximo de peso 1.000 moneda nacional, con exclusión de los aportes a que se refiere el artículo 18;
- e) Con la contribución obligatoria del Estado, igual al 1 % de los sueldos y remuneraciones de los empleados de las empresas periodísticas, y considerando a este efecto un sueldo máximo de pesos 1.000 moneda nacional. Esta contribución deberá tomarse del pago de derechos por servicios de juanetas, en concepto de eslingaje, guinche, almacenaje y estadística, aplicado al papel que utilizan las empresas comprendidas en esta ley, debiendo incluirse anualmente la partida correspondiente en la ley general de presupuesto;
- f) Con el remanente que a la fecha de la sanción de esta ley existiera en las cajas en liquidación creadas por la ley número 11.289, provenientes de los aportes de las empresas y personas a que se refiere la presente, que deberá ser transferido dentro de los noventa días de su promulgación;
- g) Con los intereses o rentas que devenguen el fondo de la Caja;
- h) Con los ingresos previstos en los artículos 18 y 19;
- i) Con el producido de las multas aplicadas en virtud de esta ley;
- j) Con las donaciones y legados que se destinen al fondo;

k) Con el 10 % del importe de las publicaciones o avisos oficiales que se acuerden a las empresas comprendidas en esta ley.

Los descuentos a que se refiere este artículo se harán efectivos desde la promulgación de esta ley.

Art. 6º — El fondo común y las rentas que se obtengan por esta ley quedan afectados exclusivamente al cumplimiento de sus disposiciones y con ello se atenderá el pago de los beneficios que oportunamente se otorguen y los gastos que origine la administración de la Caja. En ningún caso podrá destinárselos a otros fines, bajo la responsabilidad personal y solidaria de los miembros del directorio que lo hayan autorizado.

Art. 7º — Todos los fondos de la Caja serán depositados en cuenta especial en el Banco de la Nación Argentina, salvo las sumas que se fijen como indispensables para pagos corrientes.

#### *Cómputo de servicios y sueldos*

Art. 8º — En el cómputo de servicios se tomarán en cuenta los efectivos aunque no sean continuos, prestados en cualquier tiempo. La fracción que en término total de antigüedad exceda de seis meses, será computada como un año entero, a los efectos del otorgamiento de beneficios.

Art. 9º — La antigüedad del personal existente en las empresas al tiempo de la sanción de esta ley, será reconocida a contar desde el ingreso a dichas empresas, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 17.

Art. 10. — A los efectos de la antigüedad en el trabajo regular en periódicos o revistas retribuido por sueldo, colaboración o medida de la producción, se considerarán quince sueltos o 10.000 palabras como mínimo de producción publicada, necesaria para el cómputo de un mes de servicio.

Art. 11. — La Caja de jubilaciones de periodistas computará los servicios prestados en otras actividades sujetas al régimen de retiro por otras leyes nacionales u ordenanzas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, siempre que hayan sido reconocidos por las cajas respectivas. Las demás cajas computarán los servicios de periodistas y en las jubilaciones y pensiones acordadas con servicios mixtos, cada Caja contribuirá con la parte proporcional que corresponda.

A los efectos de este artículo, la Caja decretará la jubilación o pensión de acuerdo a su ley, y las demás cajas reintegrarán dicha parte proporcional.

En todos los casos el cómputo será sin bonificación de tiempo.

La manera de otorgarse y pagarse las jubilaciones y pensiones cuando se computen servicios en la forma prevista por este artículo, será establecida en la ley reglamentaria que oportunamente se dicte.

Art. 12. — El sueldo o remuneración mensual de los empleados se determinará de la siguiente manera:

a) Para el personal con remuneración fija mensual, esa asignación. Si además tuviere participación en las ganancias o asignaciones por trabajos suplementarios, esas cantidades se sumarán a aquella remuneración fija;

b) Si además de la remuneración o ganancias a que alude el inciso anterior, recibiera el empleado gratificación extraordinaria, aguinaldo u otra retribución accidental, esta suma se considerará separadamente del sueldo o remuneración y cual-

quiera sea su monto, se le aplicará el aporte del 7 %. Las empresas están eximidas, en estos casos, del aporte equivalente.

Art. 13. — Dentro del plazo de seis meses de promulgada la presente, las empresas remitirán a la Caja los datos circunstanciales (tiempo y sueldo) de los servicios que hubiesen prestado bajo su dependencia sus actuales empleados. La comprobación de estos datos deberá obtenerse de los libros llevados de conformidad a las disposiciones del Código de Comercio por las empresas a que hayan pertenecido y pertenezcan los afiliados. A falta de este medio de prueba, se admitirá toda documentación. La testimonial sólo será admisible cuando haya un principio de prueba por escrito. Las empresas requerirán y remitirán en su caso, juntamente con los datos mencionados, una manifestación de conformidad de los empleados, con la certificación de servicios anteriores a la sanción de esta ley, conformidad que hará cosa juzgada para los que la hubieren prestado, quienes no podrán iniciar posteriormente ante la Caja, ni por vía judicial, gestión alguna sobre ampliación de esos servicios; la Caja podrá, empero, realizar en todos los casos cualquiera investigación que estime pertinente en los libros y documentos de las empresas, antes de dar validez a las certificaciones presentadas.

Se tendrá por prestada la conformidad del empleado con los servicios denunciados por las empresas, si dentro de los tres meses de notificado de la denuncia por la Caja, en forma escrita, no interpone reclamación ante la misma.

Art. 14. — Para el cómputo de servicios prestados con anterioridad a la presente ley, los interesados deberán iniciar la gestión ante la Caja dentro del plazo de seis meses de su sanción, pasado el cual se prescribe el derecho.

La Caja substanciará el pedido y se expedirá sobre la validez de ese servicio, dando en todos los casos la intervención correspondiente a las partes interesadas.

Art. 15. — Toda cuestión que se suscite entre empleados y empresas sobre certificación de servicios, se ventilará judicialmente.

Art. 16. — La presentación para el reconocimiento de servicios anteriores prestados en actividades comprendidas en el régimen de las Cajas a que se refiere el artículo 11, deberá iniciarse ante la Caja que se crea por la presente, dentro del plazo de seis meses de su sanción; vencido dicho plazo, se considerará prescripto este derecho. Se dará curso inmediato a tales pedidos a efectos de obtener el pronunciamiento de las cajas respectivas, debiendo notificarse a los interesados de todas las resoluciones que puedan significar un obstáculo a su pedido.

Art. 17. — La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Periodistas formulará cargo a los empleados afiliados, con relación a todos los sueldos percibidos con anterioridad a la presente ley. Dicho cargo se computará conforme a la proporción establecida en el inciso a) del artículo 5º.

Este cargo será amortizado en cualquiera de las formas siguientes:

a) En cuotas uniformes propuestas por el empleado en actividad, al servicio de una de las empresas comprendidas en esta ley, cargándose intereses del 4 % anual. Este descuento comenzará a efectuarse al mes siguiente al de la manifestación del interesado, a cuyo efecto se hará la pertinente comunicación a la empresa;

b) De una sola vez, debiendo efectuarse el ingreso

dentro de los treinta días de notificada la parte interesada;

- c) Con el descuento del 10 % del monto de la jubilación al comenzar el goce del beneficio, incluso el interés del 4 % anual.

Si el beneficiario falleciera dejando derecho a pensión, el cargo será imputado a ésta.

Art. 18. — Cuando las amortizaciones establecidas en el inciso a) del artículo anterior, no hubieran cubierto el cargo formulado por la Caja, se practicará hasta cubrirlo el descuento sobre la jubilación o pensión acordada, del 10 %, en la forma determinada por el inciso c).

#### *De las obligaciones de las empresas*

Art. 19. — Todas las empresas comprendidas en esta ley, quedan sujetas a las obligaciones siguientes:

- a) Practicar los descuentos a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 5º, y a) del artículo 17, en los sueldos del personal de su respectiva dependencia y depositarlo mensualmente en dinero efectivo en el Banco de la Nación Argentina a la orden de la Caja, dentro de los treinta días siguientes de cada mes vencido, sin deducir cantidad alguna por ningún concepto;
- b) Liquidar y depositar las contribuciones a que se refieren los incisos d) y e) del artículo 5º;
- c) Retener de las remuneraciones de sus empleados el descuento que exija el servicio de préstamos autorizado por el artículo 29 y de los seguros adicionales al mismo, y depositar esos importes en la forma prevista para los aportes de la ley;
- d) Remitir del 1º al 10 de cada mes a la Caja, las planillas de sueldos y aportes correspondientes al mes anterior, en las que conste la nómina de todos los empleados con sus respectivas remuneraciones, días de trabajo y descuento de ley;
- e) Suministrar todos los informes que les sean requeridos por la Caja en los asuntos referentes a la ley y su aplicación, y permitir las comprobaciones que se juzguen pertinentes;
- f) Solicitar su inscripción en el registro que a tal efecto llevará la Caja, dentro de los treinta días de la promulgación de esta ley. Las empresas que se establezcan en lo sucesivo, deberán hacerlo en el mismo plazo.

#### *Penalidades*

Art. 20. — Las infracciones a lo dispuesto en el artículo anterior, serán reprimidas:

- a) Con multa de \$ 200 m/n. diarios, a contar desde el siguiente a la notificación que practicara la Caja, la infracción a los incisos a), b) y c). La Caja, vencido el tercer día de la aplicación de la multa, deberá deducir de inmediato la correspondiente acción por cobro judicial contra la empresa remisa;
- b) Con igual multa, que comenzará a correr por el mero vencimiento del plazo, las infracciones a los incisos d) y e);
- c) Con multa de \$ 20 a 100 m/n., por cada persona a que la infracción se refiere; las infracciones a las disposiciones de esta ley que no tengan establecida una penalidad especial.

#### *Procedimiento judicial y disposiciones especiales*

Art. 21. — Las actas del directorio de la Caja, asentadas en el libro respectivo y aprobadas, constituyen instrumentos públicos en cuanto se refieren a las resoluciones del directorio que las mismas contengan.

Art. 22. — Las resoluciones del directorio sobre reconocimiento de servicios serán aplicables en la Capital Federal ante el juzgado Civil en turno y en las provincias en la forma que determinen las respectivas Legislaturas.

Art. 23. — Los certificados expedidos en virtud de resoluciones del directorio, visados por el presidente de la Caja, llevarán aparejadas ejecución a los efectos del cobro de las sumas adeudadas por las empresas, por aportes o servicios de préstamos.

Art. 24. — El directorio de la Caja, aplicará las multas que autorizan las disposiciones de la presente ley, previo los trámites administrativos que establecerán su reglamentación, durante cuya substanciación deberá ser oído el infractor.

Art. 25. — Para la aplicación y cobro de las multas se seguirá el procedimiento fijado por la ley número 11.570, y el producido ingresará a la Caja de jubilaciones de periodistas.

#### *Administración de la Caja*

Art. 26. — La dirección y administración de la Caja estará a cargo de un directorio, compuesto:

- a) Por el presidente de la Caja creada por la ley número 11.110;
- b) Por uno de los representantes de las empresas y otro de los empleados y obreros que forman parte del directorio de la Caja mencionada en el inciso anterior, elegidos anualmente por sorteo;
- c) Por un representante de las empresas comprendidas en la presente ley y otro de los periodistas elegidos con arreglo al sistema establecido por la ley número 11.110. El directorio deberá quedar integrado durante el primer año de funcionamiento de la Caja; mientras tanto el directorio de la Caja número 11.110, resolverá todas las cuestiones que se presenten.

#### *Bases para la ley orgánica*

Art. 27. — La Caja organizará un sistema adscrito de legajo personal para cada uno de los beneficiarios de la presente ley, que establezca los servicios prestados con anterioridad a su promulgación, la ficha individual y la cuenta personal de aportes, sin perjuicio de lo más que estime conveniente.

Art. 28. — El directorio proyectará y elevará al Poder Ejecutivo para su remisión al Honorable Congreso, dentro del año de la promulgación de esta ley, previo censo y valuación actuarial correspondiente, un plan de los beneficios a concederse, con sujeción a las siguientes bases:

- a) No se otorgará beneficio alguno con menos de sesenta aportes mensuales efectivos;
- b) Los servicios computados por las cajas mencionadas en el artículo 11, y prestados con anterioridad a la vigencia de esta ley, no serán considerados hasta pasados los sesenta meses de su promulgación.

Los beneficios mínimos que la Caja acordará según las condiciones que establezca la ley orgánica, serán los siguientes:

- 1º Jubilación ordinaria;
- 2º Jubilación extraordinaria para el empleado que se incapacite para el trabajo después de 10 años de servicios;
- 3º Pensión por fallecimiento del empleado a la familia del mismo, después de 10 años de servicios.

#### *Inversiones redditicias*

Art. 29. — El directorio de la Caja queda autorizado para invertir los fondos disponibles en la forma que lo establezca la ley orgánica, respetando las siguientes normas:

- 1º Los préstamos deberán otorgarse pasado los 10 años de la promulgación de esta ley;
- 2º Sólo podrán otorgarse al personal con más de 10 años de servicios;
- 3º Los préstamos serán para la edificación o para la adquisición de la vivienda, con garantía hipotecaria;
- 4º Los bienes adquiridos con préstamos de la Caja son inembargables durante la vida del propietario, de su esposa e hijos menores y deberán ser combinados con un seguro de vida por el importe de la deuda.

Art. 30. — Las pensiones o jubilaciones que se otorgan son inembargables, salvo por alimentos o litis expensas en la proporción que se determine judicialmente.

#### *Disposiciones complementarias*

Art. 31. — Los derechohabientes del empleado que falleciera afiliado a esta Caja con más de 20 años de servicios, tendrán derecho a los beneficios que fije la ley orgánica.

Art. 32. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

JUAN G. KAISER  
Carlos González Bonifino.

**Sr. Presidente.** — En consideración.

**Sr. Landaburu.** — Pido la palabra.

En nombre de la Comisión de Legislación General, informaré brevemente este despacho sobre jubilación de periodistas, por el cual aconsejamos al Senado que apruebe, sin ninguna modificación, la sanción venida de la Cámara de Diputados. Se trata, señor presidente, de un asunto que viene por tercera vez, en revisión al Senado, que ha motivado —como dije al fundar la preferencia para que fuera considerado en la sesión de hoy,— la presentación de una veintena de proyectos sobre la materia; que ha sufrido largas demoras y vicisitudes de diverso orden, que han obstaculizado su trámite, que podría calificarse, sin exageración y sin hipérbole, como de una verdadera odisea parlamentaria.

Hay acuerdo unánime, señor presidente, o casi unánime, al menos, en la conveniencia, la justicia y en la oportunidad de jubilar a los periodistas argentinos. Pero se ha discrepado, a menudo, sobre el concepto con que esa jubilación debía crearse; sobre los medios de financiar la ley respectiva; sobre el número de personas que habrían de estar comprendidas en la misma; y sobre los alcances de los beneficios que por esa ley habrían de ser otorgados.

Para unos, la prensa es una industria o un comercio como otro cualquiera, concepto evidentemente exagerado y erróneo, porque si bien puede admitirse que existe una industria de la publicidad, sobre todo en los tiempos modernos, no es posible negar que ella tiene características propias, que se realiza por medios diferentes y que cumple finalidades distintas, de tal modo que no podría identificarse con ninguna de las otras industrias conocidas.

Sin embargo, como consecuencia de ese criterio, se ha intentado alguna vez jubilar a los periodistas dentro de la ley número 11.110, relativa a las jubilaciones y pensiones de los obreros de empresas particulares que explotan servicios públicos; o bien, al lado de los obreros de la industria y el comercio en general, y de la marina mercante, como ocurrió con la ley número 11.289, que fuera derogada más tarde.

Para otros, señor presidente, los que toman la prensa en su función más trascendente, para los que la aprecian en su tarea específica, en cuanto tiene de más elevado y noble, el periodismo, es una verdadera función pública, opinión emanada del concepto general muy conocido de que la prensa constituye el cuarto poder del Estado.

Alberdi, a quien no puede dejar de citarse cuando nos referimos al rol y a la misión de la prensa, ha dicho, en páginas que honrarían la pluma del mejor publicista del mundo: «Hablar de la prensa es hablar de la política, del gobierno, de la vida misma de la República, pues la prensa es su expresión, su agente, su órgano. Si la prensa es un poder público, la causa de la libertad se interesa en que ese poder sea contrapesado por sí mismo.»

Es bien sabido, señor presidente, que desde este punto de vista, la prensa cumple a diario una alta función pública, tratando e ilustrando las más graves cuestiones y los más arduos problemas del Estado; ejerciendo una función directriz y rectora de la opinión pública; fiscalizando y controlando los actos del poder público, para aplaudirlo o para censurarlo, y

cumpliendo en un país libre como el nuestro una de las condiciones, uno de los atributos esenciales del gobierno republicano, que estriba precisamente en la publicidad de sus actos y en la responsabilidad de los funcionarios que los llevan a cabo.

Esta no es toda la prensa naturalmente; es la prensa grande, la prensa doctrinaria, la prensa de ideas, y aun la prensa de combate, cuando sus luchas se desenvuelven en torno de los grandes problemas del país.

Esa es, señor presidente, la prensa que apareció en los albores de nuestra vida independiente, con Moreno, Monteagudo y el deán Echeagüe, la prensa que vivió obscurecida en el país durante la larga noche de la tiranía, pero que entonces y después, en ambos márgenes del Plata y en Chile, reapareció y floreció con Varela, con Alberdi, con Sarmiento, con Mitre, con Frías, con Mármol, con López, con Gutiérrez y más tarde con Paz, con Láinez y con todas las grandes figuras conocidas de la prensa nacional, las que han contribuido con su conducta y con su esfuerzo tenaz y patriótico, a cimentar sobre una base sólida e indestructible, el prestigio y la alta tradición de la prensa argentina.

Como una consecuencia lógica de este concepto, que hace del periodismo una verdadera función pública, se ha pensado alguna vez jubilar a los periodistas en una sección de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles para los empleados de la administración pública.

Hay, por fin, un tercer grupo de pensadores y de legisladores que no comparten totalmente ninguno de los conceptos antes expresados y que creen que los hombres de la prensa deben ser jubilados con cierto concepto corporativo o gremial, porque si bien la prensa no constituye un gremio propiamente dicho, la mayor parte de los hombres que la sirven y que llenan todas las múltiples funciones que comprende la integridad de sus tareas en el periodismo moderno, desenvuelven su vida de labor en un ambiente más o menos común aquejados por las mismas necesidades, por los mismos problemas y alentados también por las mismas aspiraciones y por las mismas esperanzas.

Este tercer concepto tiene principalmente en cuenta, como he dicho, la situación de la mayoría de los empleados del periodismo; prestando de la situación efectiva de las cabezas, de los directores, redactores en jefe, de los que dan normas, rumbos y directivas a la prensa; de

la situación de los hombres privilegiados que trabajan en ella, de aquellos ilustres «obreros del pensamiento», como los llamara Rodó; y prestando también de la situación de los empleados inferiores, de los obreros que realizan una tarea casi esencialmente manual, y contempla entonces el conjunto de los hombres que realizan tareas intermedias y que son, como he dicho, los que están realmente colocados en esa situación similar de vida y de trabajo.

Entre ellos están los sueltistas, cronistas, reporteros, corresponsales, correctores de pruebas, fotógrafos, etcétera, hombres todos que desenvuelven su labor en condiciones a veces penosas y agobiantes y que son realmente merecedores de la consideración de los poderes públicos y aun de la protección del Estado. Para estos hombres es principalmente la ley de jubilaciones de periodistas.

Refiriéndose a ellos, a la tarea que cumplen, decía con acierto el informe elevado en marzo de 1925 al ministro de Higiene, Asistencia, Trabajo y Previsión Social de Chile, juntamente con el correspondiente proyecto de ley de jubilación de periodistas y de gráficos.

«Por el carácter público u ostensible de la labor que los periodistas realizan, parece casi innecesario poner especialmente de relieve las condiciones de permanente esfuerzo y desvelo en que estos «trabajadores» tienen que vivir para cumplir bien la parte que a cada uno de ellos corresponde en la obra sin término que tiene a su cargo la prensa diaria. Labor absorbente y agotadora, es difícil que haya otra que someta más ruda y permanentemente a contribución las facultades del hombre y, lógicamente, que justifique más, con respecto a los que a ella se consagran, medidas económico-legales que les aseguren en vida un retiro honorable, y sin las inquietudes que conlleva la miseria, y a su muerte, la certeza de una pensión equitativa para sus familias.

Hay una condición del trabajo periodístico que no es posible eliminar, si el diario ha de seguir siendo lo que es y tiene que ser —una fiel reproducción de la vida universal, puesta a los ojos del lector, cada veinticuatro horas— la nocturnidad. Ya se sabe que el trabajo nocturno anticipa y agrava los efectos naturales de todo trabajo y del ineludible desgaste del organismo humano.»

En esta dilatada demora que ha sufrido la sanción de la ley de jubilaciones de periodistas, algunos países de América y de Europa nos han tomado la delantera en la sanción de leyes

sobre esta materia. Haré una brevísima incursión en el terreno de los antecedentes extranjeros.

En Francia existe la ley del 29 de marzo de 1935 que incorpora al Código del Trabajo la sección denominada «De los periodistas profesionales» que comprende todo lo relativo a sueldos, salarios, seguros de enfermedad, etcétera.

En Italia existe el decreto del 1º de julio de 1931 que aprobó y puso en vigencia el contrato colectivo de trabajo periodístico, celebrado entre la Asociación Nacional Fascista de editores de diarios, el Sindicato Nacional Fascista de periodistas, y aprobado por la Confederación Nacional Fascista de profesionales y artistas; comprende todo lo relativo a salarios, retiros, seguros, enfermedades y seguros por accidentes.

En Estados Unidos, donde la jubilación de periodistas es del resorte estadual, hay una amplísima legislación sobre jubilación de periodistas y sobre trabajo periodístico.

En Chile existe el decreto ley número 454, de 1925, que crea la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas; es amplísimo.

En Bolivia se dictó el decreto ley del 10 de mayo de 1938, creando la Caja Nacional de Jubilaciones, Pensiones y Montepíos Periodísticos. Ese decreto ley es notable por los fundamentos que lo presentan, que tienden a destacar el rol más alto de la prensa y a reconocer el carácter más noble de sus funciones.

En el Uruguay, existe la ley de octubre de 1928, que declaró comprendidos a los periodistas y gráficos en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Obreros del Servicio Público.

En nuestro país se han presentado, tanto en el orden nacional como en el provincial, numerosos proyectos de jubilación para periodistas y gráficos. Una sola provincia sancionó su ley, la de Córdoba, que lleva el número 3.784, del 29 de agosto de 1938 y que creó la Caja de Jubilaciones y Pensiones para Periodistas.

Dije antes, señor presidente, que este asunto venía por tercera vez en revisión al Senado. La primera, ocurrió con motivo de la sanción de la ley número 11.289, que incluyó la jubilación de periodistas y gráficos, juntamente con la de los empleados del comercio, de la industria y de la marina mercante. Esa ley, como es sabido, fué derogada por la número 11.358, que ordenó la devolución de los aportes que se habían entregado.

Pasaron muchos años. En 1932, sobre la base del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados primero, y el Senado, después, sancionaron la ley que debió llevar el número 12.163; y digo que debió llevar ese número, porque la ley, como es sabido, fué vetada por el Poder Ejecutivo, en virtud de causas y de razones que voy a examinar brevemente en seguida.

Desentendiéndose del trámite constitucional del veto de la ley de 1935, la Cámara de Diputados dió entrada y curso a nuevos proyectos sobre esta materia. En 1937 fué presentado uno que subscriben los diputados Spinetto, González, Vicchi, de Andreis, Cafferata, Agulla, Ravignani, Castro, Guillot y Aráoz; y en 1938 tuvo entrada otro que subscribían los diputados Pastor, Morrogh Bernard, O'Reilly, Tamborini, Pita, Godoy, Cafferata, Lanús y Ravignani.

Sobre la base de esos proyectos y contemplando las observaciones contenidas en el veto del Poder Ejecutivo, se ha dictado la sanción que ha venido en revisión al Senado y que fuera aprobada en la reunión del 18 de enero último, previo un informe escrito del diputado Cisneros apoyado por discursos e informes orales de diputados de todos los sectores políticos.

He entrado en estos antecedentes para demostrar el favor y la simpatía que este asunto de la jubilación de periodistas ha despertado en todos los tiempos en el seno del Parlamento argentino, aunque su sanción definitiva haya sido impedida por obstáculos y vicisitudes extrañas a la voluntad del Congreso. Y lo he hecho también para demostrar que existe unanimidad a su respecto, que la opinión favorable ha sido emitida sin cortapisa por los representantes de todos los sectores políticos. La última sanción de la Cámara de Diputados fué unánime, con sólo una disidencia parcial del diputado Solari, fundada en la exclusión de los obreros de la industria poligráfica.

El mensaje del Poder Ejecutivo que vetara la ley de 1935, dice en el párrafo pertinente, único que voy a leer porque es una síntesis de los fundamentos que aquél invocara, lo siguiente: «El proyecto sancionado por el Honorable Congreso, al ampliar la iniciativa del Poder Ejecutivo incorporando al régimen de la nueva ley el personal de los establecimientos gráficos, al quitarle el carácter de obligatoriedad para todos los que en las mismas condiciones trabajan fuera de la Capital de la República y en los territorios, y al consagrar una



escala de aportes que no se puede referir a bases seguras, afecta vitalmente la ley y la Caja que por ella se instituye». Como consecuencia de estas observaciones vetaba el inciso 3º del artículo 3º, el artículo 2º y el artículo 5º. La Cámara de Diputados, como he dicho, se desentendió del trámite de ese veto y procedió a sancionar la jubilación de periodistas sobre la base de proyectos nuevos presentados ulteriormente.

Como hemos visto por el párrafo que he leído del mensaje de veto de 1935, eran tres las razones fundamentales que invocaba el Poder Ejecutivo para proceder en esa forma. Yo me voy a referir, siquiera sea brevemente, a cada una de ellas, porque no obstante haber sido contempladas en la nueva sanción, se refieren a capítulos y aspectos fundamentales del asunto mismo de la jubilación de periodistas que deben quedar dilucidados ante el Senado.

La primera razón invocada por el Poder Ejecutivo era el carácter local de la ley de 1935. Este fundamento del veto implica una cuestión de trascendencia, una cuestión de orden institucional o constitucional, a la que me voy a referir brevemente. Esta cuestión se puede plantear en los siguientes términos: ¿Puede el Congreso de la Nación dictar leyes del trabajo o leyes jubilatorias para actividades del trabajo con aplicación para todo el territorio de la República, o al hacerlo así afecta facultades legislativas que la Constitución reserva a las provincias?

Esta cuestión ha sido tratada con amplitud por los autores que se dedican a la enseñanza de esta materia. Pueden verse al respecto el libro del doctor Unzain *Legislación del Trabajo*, tomo I, página 119; el del doctor Antokoletz *Curso de Legislación del Trabajo*, tomo I, página 150.

Por mi parte, señor presidente, tengo hecho un estudio amplio y a fondo sobre este aspecto de la cuestión. Formando parte de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, tuve oportunidad de informar nuestro despacho de insistencia en el asunto del cierre del comercio a las 20 horas, frente al veto del Poder Ejecutivo, en la sesión celebrada el 5 de agosto de 1926, que puede verse en el tomo III del Diario de Sesiones de ese año, página 472.

En ese informe, que ha merecido el honor de ser publicado en la sección de legislación de la «Revista de Jurisprudencia Argentina», tomo XXI, expuse con toda amplitud los fundamentos que apoyaban mis conclusiones. Me referí a

los antecedentes constitucionales; cité la opinión de los autores; hice referencia a los debates parciales que esa cuestión había motivado a propósito de la sanción de algunas leyes de trabajo, y realicé, por fin, una revista completa de la legislación del trabajo hasta entonces existente, demostrando que había una tendencia visible e incontrastable a la unidad de la legislación en esa materia.

La síntesis de esa opinión, para no leer ese informe que es demasiado extenso, es la siguiente: en virtud de la atribución conferida al Congreso por el inciso 11 del artículo 67 de la Constitución nacional, corresponde a éste la facultad de dictar los códigos de fondo: Civil, Comercial, Penal y de Minería; no sólo los códigos como cuerpos orgánicos de legislación, en la forma y con la comprensión que les dió originariamente el Congreso, sino todos los temas, todas las materias legislativas de fondo, que pueden o no estar comprendidos en estos códigos, pero que encuadran dentro de la mencionada atribución constitucional. A las provincias les incumbe solamente establecer el procedimiento y crear las autoridades de aplicación. Además de ello, y como una emanación de su propia autonomía, les corresponde en esta materia las facultades reglamentarias de simple policía, o que sólo signifiquen el ejercicio de poderes meramente municipales. Todo lo demás escapa a su órbita legislativa y corresponde por entero a la jurisdicción del Congreso nacional.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Senado, senador Sánchez Sorondo.

Tienen aplicación a todo el territorio argentino y han sido sancionadas con ese carácter: la ley número 5.291, derogada más tarde por la número 11.317, sobre el trabajo de la mujer y menores; la número 9.148 y la número 12.101, sobre agencias de colocaciones; la número 9.688, de accidentes del trabajo; las números 10.650 y 11.308, sobre jubilaciones de ferroviarios; la número 11.278, sobre pago de salarios en moneda nacional; las números 11.232 y 11.575, de jubilaciones bancarias; la número 11.110, de jubilaciones de empresas particulares que explotan servicios públicos (es local, pero permite el acogimiento de las empresas radicadas fuera de la Capital Federal); la número 11.544, de jornada legal, y por fin, la número 11.729, llamada ley de despido, que está incorporada al Código de Comercio. Sólo tienen carácter local la ley número 4.661, de descanso domi-

nical, por razones circunstanciales que dió en parte, cuando fué sancionada, el señor diputado de Vedia, y la ley número 11.505, de trabajo a domicilio, cuya reforma inminente ya se ha anunciado.

En consecuencia, si tienen carácter nacional las leyes reglamentarias del trabajo de mujeres y menores, la de jornada legal de trabajo, la de accidentes del trabajo, la de pago de salarios ganados en el trabajo y las leyes jubilatorias de actividades o de trabajos que se realizan en todo el país, como las que he citado, es indudable que esta ley debe tener carácter nacional también.

Una ley de jubilaciones, de retiros o de montepío, es la consecuencia de una vida de trabajo. Son términos correlativos, como son la vigilia y el sueño. No se concibe que el poder para legislar sobre el trabajo exista en una parte y que el poder para dictar la ley de retiros, que es la consecuencia de ese trabajo, exista en otro Poder Legislativo.

No creo necesario, señor presidente, abundar en mayores consideraciones sobre este aspecto del asunto, aunque estoy habilitado para hacerlo, por el estudio que realizara antes sobre este mismo punto, a que me he referido.

Paso, entonces, a tratar el segundo motivo del veto del Poder Ejecutivo a la ley de 1935.

Se refería a la inclusión de los gráficos, que no estaban comprendidos en el proyecto original y que el Poder Ejecutivo consideraba inconveniente. Los obreros de las industrias poligráficas, sino en su totalidad en su evidente mayoría, han resistido su inclusión en esta ley de jubilación de periodistas. Consideran que no gozan de las condiciones de seguridad en su vida de trabajo, en forma y proporción tal que les permita sufrir una disminución de su salario en forma apreciable, a cambio de un beneficio que ellos reputan lejano y problemático. Esos obreros realizan su labor de una manera realmente inestable; trabajan algunos días y huelgan otros; trabajan unos días en una empresa y después pasan a otra, sin tener garantías de estabilidad en ninguna parte. Por otro lado, se comprende sin esfuerzo la conveniencia de no incluir a los gráficos, que realizan una tarea simplemente manual, con los periodistas, que cumplen tareas superiores, de orden intelectual.

Tengo que declarar, en nombre de la comisión, sin embargo, que ella vería con el mayor interés y con la mayor simpatía cualquier iniciativa tendente a la jubilación de los

obreros de las industrias poligráficas, una vez desaparecidas las circunstancias que la impiden por ahora, y que esos mismos obreros fuesen los primeros en preocuparse en propugnar la sanción de esa ley.

El tercer motivo invocado en el veto del Poder Ejecutivo, y que también contempla la sanción de la Cámara de Diputados, es el que se refiere a la escala en el aporte jubilatorio de los empleados.

La ley de 1935 indicaba esa escala: hasta \$ 100 m.n. mensuales, el 6 %; por lo que exceda de \$ 100 a \$ 200 m.n., el 7 %; por lo que exceda de \$ 200 a \$ 500 m.n., el 8 %; por lo que exceda de \$ 500 hasta \$ 800 m.n., el 9 %; por lo que exceda de \$ 800 hasta \$ 1.000 m.n., el 10 %. Sobre las sumas que excedan de \$ 1.000 moneda nacional no se efectuaría descuento alguno.

Mientras tanto las otras leyes básicas de las jubilaciones vigentes fijaban un descuento único. Así, la ley número 11.232, de jubilación de bancarios, establece el descuento del 7 %; la número 9.653, de jubilación de ferroviarios, establece el 3 %, ampliado más tarde por la ley número 10.650, al 5 %; y, finalmente, la ley número 11.110, fija también un descuento único del 5 por ciento.

Esto no quiere decir, señor presidente, que ha de establecerse la igualdad en la situación de los empleados frente al beneficio de la jubilación, cualquiera sean los sueldos que ellos ganen o devenguen. No; la escala ha de establecerse oportunamente en la ley orgánica y reglamentaria, al fijar el sueldo de jubilación en un porcentaje que disminuye a medida que el sueldo aumenta, haciendo desaparecer así las injusticias, que a veces son irritantes, en beneficio de los sueldos menores, a los que se les concede una jubilación representada por un mayor porcentaje de esos haberes.

Fuera de estas tres cuestiones comprendidas, como he dicho, en el veto del Poder Ejecutivo, contempladas y salvadas en la nueva sanción que nos viene de la Cámara de Diputados, este proyecto también contempla otros aspectos del asunto, propios de una ley básica, en los que no voy a entrar por el momento. Haré sólo la salvedad referente al aporte del Estado, porque constituye una originalidad de esta ley, y porque posiblemente ha de ser argüido como un fundamento contrario a su sanción.

El aporte del Estado, señor presidente, es una consecuencia lógica del concepto que considera al periodismo como una función públi-

ca. Es indudable que la prensa realiza una tarea de colaboración con los poderes públicos y que bajo ese punto de vista puede y debe merecer el concurso del Estado, representado por un aporte que contribuya a establecer sólidamente las bases financieras de la Caja.

He dicho que es una originalidad de la sanción de la Cámara de Diputados, pero no lo es en otros países. La legislación extranjera sobre la materia ofrece el ejemplo casi invariable de sanciones que contienen, en más o en menos, el aporte del Estado a las jubilaciones de los periodistas.

Así, en Francia, por la ley antes citada, artículo 3º, se crea ese aporte que está representado por parte de los gastos de publicidad del Estado. En Chile, por el artículo 5º del decreto-ley antes mencionado, se crea el aporte del Estado que está financiado con multas y con el 30 % de los bienes vacantes y de las tierras mostrenas. En Bolivia, por el decreto-ley que también he citado, cuyo artículo 6º establece el aporte del Estado con un 10 % de los impuestos a la publicidad y a la introducción de papel y las multas correspondientes. En el Uruguay, por la ley de 1928, artículo 7º, inciso c), también se crea el aporte del Estado derivándolo del impuesto a los diarios que se imprimen fuera del país y que se vendan allí. Y por último, en la ley de Córdoba número 3.784, se fija el aporte del Estado en una suma fija de 50.000 pesos, que debe darse durante los diez primeros años. Y en todos, o en casi todos los proyectos presentados al Parlamento argentino sobre jubilación de periodistas o de periodistas y gráficos, se proponía o se aconsejaba la sanción del aporte del Estado.

Fuera de estos aspectos y capítulos sencillos de la ley, la sanción venida de la Cámara de Diputados contiene otros de detalle, en los que no voy a entrar por el momento, a menos que se hiciera algún debate a su respecto y que se refieren a las otras fuentes de aportes para formar la Caja, al reconocimiento de antigüedades, a la forma de computar los servicios, a la administración de la Caja, a las penalidades, etcétera.

La comisión está lejos de creer que la sanción venida de la Cámara de Diputados esté a cubierto de toda observación y represente una obra perfecta. Podría citar algún artículo digno de una mejor redacción, acaso de alguna aclaración, tendiente a quitarle cierta ambigüedad. Pero sobre estas preocupaciones o sobre estos escrúpulos legislativos del momento, que podían imponer razones de técnica, hemos colocado una

razón o un concepto de carácter general: es necesario sancionar cuanto antes la ley de jubilación de periodistas, la ley básica, para evitar que entremos en nuevas demoras, en nuevas vicisitudes, que la dejen sometida a un porvenir inseguro.

Se trata de una simple ley básica, de atesoramiento, que tiende a la formación inmediata del fondo jubilatorio, y que deja reservada para el futuro, para la ley orgánica o reglamentaria, la solución de todas las múltiples cuestiones de detalle que entraña y que comprende una ley de esta clase.

Por eso, la comisión no ha vacilado en aconsejar al Senado que la sancione en los términos en que ha venido de la Cámara de Diputados. En esa forma, señor presidente, —y con esto concluyo— habremos dado término a la primera fase del problema jubilatorio de los periodistas y habremos dado también principio de ejecución a ese viejo anhelo, a esa sentida y justa necesidad de los periodistas argentinos.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! en las bancas.*)

**Sr. Caballero.** — Pido la palabra.

Yo declaro al Senado que mi exposición probablemente va a ser un poco extensa; de modo que si ello fuera posible la iniciaría ahora para continuarla mañana, si la urgencia de la aprobación del despacho, enunciada por el señor miembro informante, no fuera tanta.

A pesar de la unanimidad con que este proyecto fué aprobado en la otra Cámara y la casi unanimidad que sospecho va a tener en el Senado, voy a dar las razones que van a determinar mi voto en contra, por mis convicciones filosóficas y porque considero que ella consagra una situación de privilegio, razones que he de dar de la manera más detallada y que se refieren a la forma en que la ley número 11.289, que amparaba en su articulado a casi toda la masa trabajadora argentina, incluso los periodistas, fué abatida en este mismo Senado, con el aplauso de los que ahora vienen buscando el amparo de ese pensamiento generoso que negaron en su hora a la masa de trabajadores argentinos, en su beneficio exclusivo. No quiero que se interprete, de ninguna manera, esta actitud mía, como una actitud apasionada frente a lo que ya alguna vez he calificado como el mal de la civilización moderna, que es la publicidad desenfrenada a que tiene que recurrir, a veces fatalmente, la misma prensa, en razón de que se ha industrializado.

Y no estoy, señor presidente, tan solo, en esta actitud contra la prensa, a la que se la vin-

cula fatalmente a la suerte de la democracia, porque con toda sorpresa para mí —no puedo negarlo—, he leído en el diario «La Razón», del 19 de este mes, un reportaje al diputado Repetto, de filiación socialista, en el que declara que el mayor enemigo de la democracia es, precisamente, la prensa diaria, con el carácter de prensa industrializada.

Como no he tenido tiempo de preparar esta exposición, tendré que ir salteando sobre algunos conceptos, en razón de que me ha faltado el tiempo necesario para coordinar, en la forma que lo hubiera deseado, las cosas que pensaba decir frente a un poder perverso, como es el que anaerónicamente ejerce la prensa barata, dentro de un régimen político de responsabilidad.

Porque el régimen político, frente al cual este cuarto poder del Estado desenvuelve su acción, es un régimen de responsabilidad. No hay poder de este Estado que no tenga que dar cuenta de sus actos a otros poderes, aunque no le sean directamente subordinados, y el único poder que no tiene a quien dar cuenta de sus actos, es ese cuarto poder del Estado liberal, que es, por este motivo, un poder irresponsable.

Saben pues los señores senadores, que en 1923, al sancionarse la ley número 11.289, los hombres a quienes beneficiaba, eran argentinos auténticos o descendientes de los extranjeros que vinieron por su propio impulso en grupos selectos, sobre cuyo espíritu la hermosa tierra nuestra, la noble población que en ella vivía, dejó su sello imperecedero y tan hondo, que bien podríamos decir, que con nosotros se confundió para siempre, esa clase de españoles, esa clase de italianos, esa clase de ingleses, esa selecta minoría de franceses.

Vengo de mis pampas natales, con la visión de grandes recuerdos en mis pupilas. Nada queda de su belleza cuya desaparición tanto han lamentado Hudson, Cunninghame Graham, Head. Nada queda tampoco de su población pero como símbolo de la comunidad de sentimientos, de peligros y de trabajos, que he recordado, en los humildes cementerios del Sur de Córdoba, se leen nombres de esa razas, al lado de los nombres criollos tradicionales, unidos en el abrazo de la muerte, como lo estuvieron en las fatigas y peligros de la vida.

Yo sostengo que los regímenes de las democracias, aun con el carácter liberal e individualista, son organizaciones de libertades limitadas, y en ninguna de las democracias existentes en el mundo, sean de forma republicana

o de forma monárquica, los poderes de la prensa dejan de tener sus límites, ni ningún derecho ni libertad deja de tener el suyo: solamente la prensa diaria, industrializada, barata, sensacionalista, y de todas las caracterizaciones de este orden, es la que reclama para ella esta libertad ilimitada. A la misma sociedad, a la que ella infiere los males más graves, es a la que le viene a reclamar ahora el amparo para los hombres que utiliza como agentes de los males que esta prensa causa a la sociedad.

Dije, señor presidente, que lamentaba esta actitud que debo tomar, porque temía con ella poder llegar a herir algún interés personal, porque ha sido una línea de conducta en mi vida pública el no pronunciar nunca contra los hombres palabras irreparables, de esas que dejan resentimientos implacables en los corazones, pero a esta altura de la vida, cuando ya veo huir detrás de sus cimas heladas todo lo que puede quedar en mí de tesón y de energía, como puedo declinar convicciones que he expresado en el recinto de este Senado, ya que son derivadas de meditaciones, de estudios y de la observación sincera de lo que ocurre en las sociedades donde la prensa industrializada ejerce su imperio.

He tenido que tomar esta actitud y oponerme en general y totalmente a este proyecto, que en lo que se refiere a la jubilación de periodistas voté junto con la ley número 11.289, que, como he dicho, fuera abatida en esta Cámara.

Algunos de los señores senadores recordarán que en noviembre de 1923 fué sancionada la ley número 11.289. El miembro informante de la Comisión de Legislación la ha recordado aunque, como es natural, en la exposición general que debió hacer sobre el proyecto, no le ha dado la significación que esta ley tuvo y que yo quiero aquí constatar.

La ley número 11.289 creaba la Caja de Previsión Social para empleados y obreros de los establecimientos mercantiles, para empleados y obreros de los establecimientos industriales, para empleados y obreros del periodismo, y para empleados de la marina mercante argentina. Todo lo que tuviera relación o ligera afinidad con estas industrias, quedaba incorporado a los beneficios de la ley, y los patrones mismos, los dueños de empresas, en el afán, los que concibieron esta ley, de ampararlos también en casos de contrastes comerciales, los incluyeron en un artículo contenido en algunos de estos tomos, que si tengo tiempo he de leer, y que no llegó a incorporarse definitivamente en este régimen porque esta ley fué suspendida en el mes de julio de 1925.

El espíritu que inspiraba la ley número 11.289 era muy distinto del que inspira muchas leyes que el Parlamento argentino vota sin fijarse ni en la doctrina que va envuelta en ellas, ni en las consecuencias fatales que van a tener del punto de vista de la tranquilidad y de la paz social.

La ley número 11.289 era una ley inspirada en la idea de la solidaridad social, es decir, que a un fondo común que la ley creaba, debían aportar sus contribuciones tanto los patrones como los empleados; y a esta idea no hay que confundirla con la idea del seguro social, que es muy distinta, que quiere la nivelación para todos los hombres de trabajo en un estado muy fronterizo a la miseria.

La ley número 11.289 era una ley original en nuestro país, porque por primera vez arrojaba a la entraña ya estéril de la política liberal esta idea de la solidaridad social, por medio de la cual pudiera quizás ampararse a las masas de trabajadores abandonados a su destino por el régimen individualista de la actual sociedad.

Entonces la idea de solidaridad social, que tradujo la ley número 11.289, venía apoyada en el mensaje con que el gobierno del doctor Frigoyen envió a la Cámara de Diputados. En ese mensaje decía: «El propósito de este proyecto de ley es mantener al trabajador de cualquier categoría en el nivel social que ha sabido conquistar con su esfuerzo», es decir, que no era una ley de seguro social, era una ley de seguridad social, de paz social y de dignidad humana. Un hombre que llega por su acción individual, por las condiciones de su inteligencia, por las aptitudes de su disciplina, por el respeto que tiene a las obligaciones morales que contrae en el ejercicio del trabajo, no es justo que si ha conquistado las posiciones a que tiene derecho por esa acción en el trabajo y que si esa posición le permite vivir como para incorporarse definitivamente a los goces de la civilización, no es justo, repito, que ese hombre, al declinar de la vida, tenga que ir a percibir los beneficios del seguro social, que son precarios y reducidos y que tienden a igualar en la miseria a todos los que ya no pueden trabajar, porque se lo impide la vejez o la enfermedad.

Esta ley, decía, fué aprobada y en ella se establecía que todo hombre que hubiera trabajado treinta años en tareas útiles a la sociedad, tenía derecho a un retiro cuyo promedio sería cuando menos del 80 % de los sueldos que hubiera devengado en el curso de sus ocupaciones sucesivas.

Esta es una idea trascendental y profunda: cuando el hombre ha llegado a cierto nivel económico, la familia que ha formado no tiene por qué descender con la desaparición del jefe del hogar, de nuevo a la miseria, al abandono y a la indignidad de la pobreza. Este carácter de la ley era realmente nuevo en el mundo. Existían muchas leyes semejantes a ésta, pero todas terminaban asegurando al trabajador un retiro de las características precarias del que he dicho procura el seguro social.

Resolvía el problema de la estabilidad de la familia, de la mejora del jefe de familia. Esta sociedad no ha tenido casi nunca una actitud de amparo para el trabajador en el período activo de su vida. Ella sólo protege al que se enferma y al que delinque, pero para el hombre sometido a las fatalidades sociales de la desocupación, de la falta de trabajo, para ese hombre no tiene nunca una ayuda ni quizás un recuerdo.

La ley número 11.289, fué concebida para realizar grandes concepciones sociales. Quiso resolver para una gran parte del pueblo trabajador, el angustioso problema de su libertad económica, dentro de la paz, con el concurso de todas las fuerzas sociales y del Estado. Esta fue la política llamada demagógica del radicalismo tradicional, desconocida por los que invocan la sombra de su abanderado. Frente al concepto de la explotación individualista del trabajo humano, la ley procuraba la independencia económica de los trabajadores, armonizando los intereses de los trabajadores de todas las clases que cooperan a los mismos trabajos, demostrando, según la expresión de Láinez, los resultados admirables producidos por el deseo de la seguridad individual, combinado con el principio de asociación. La esencia de la solidaridad social, de cuyos postulados nosotros extrajimos el articulado de la ley número 11.289, no se entrega indefensa a la fatalidad de las leyes naturales; por el contrario aspira a dominarlas en nombre de una gran idea de justicia y de redención humana. Alguna vez he dicho en esta Cámara, que si el espíritu humano es capaz de doblegar las fatalidades naturales como lo prueba el hecho de haber abierto nuevas comunicaciones entre los océanos, de haber opuesto a la ley de gravedad la fuerza de los motores de explosión, para conquistar el aire, le haber arrancado en parte su secreto al misterio que nos rodea, reproduciendo la vibración de la voz humana dormida en el seno de lo que hasta ayer era para nosotros la na-

da, ¿cómo no ha de ser capaz también de quebrar la fatalidad social, siquiera sea en alguno de sus aspectos más tristes, como lo es la vejez sin amparo de los hombres de trabajo. La ley número 11.289, se preocupaba con especialidad en algunos gremios de trabajadores, que por no ser manuales, ya llamé la *clase media del trabajo asalariado*. ¡De esos trabajadores ya representé, entonces, no los intereses, como lo dijo el senador miembro informante de aquella otra Comisión de Legislación, sino sus esperanzas!

Una de las satisfacciones más grandes que yo he tenido —aquí en estos tomos está la historia viviente de esa escena—, fué el verme acompañado en la defensa de esta ley por hombres de todos los sectores políticos, y especialmente por hombres de filiación conservadora. Estos senadores de filiación conservadora fueron los que se opusieron decidida y firmemente al abatimiento de esta ley, y recuerdo esto porque ellos eran ardorosos adversarios del Ejecutivo que la había iniciado, pero en nombre de sus sentimientos de argentinos, generosos y nobles no vacilaron en abandonar sus banderías para congregarse en defensa de aquel instrumento de redención y dignificación de los trabajadores argentinos.

Esa circunstancia se renovó para mí después de muchos años, cuando, frente a las coaliciones disimuladas o no de los llamados frentes populares, antes de la consagración del gobierno actual, nosotros salimos a las calles, a todos los ámbitos del país para oponernos a esos propósitos ocultos o manifestados que podían comprometer el estado social actual del país y su porvenir.

—Ocupa la presidencia el vicepresidente de la Nación, doctor Ramón S. Castillo.

Una de las grandes ideas de la concordancia, cuya bandera veo ultrajada y casi arriada, ha sido, precisamente, esa actitud, cuando ella expuso la idea de oponerse a la acción de los frentes populares, en nombre de la solidaridad social, en nombre de la tradición del país. Pero estas digresiones no sé a dónde me llevarían, de manera que quiero dejar establecido que presiento —por eso las abandono aquí— que va a llegar, de uno momento a otro, la necesidad de las actitudes definitivas, y que abrigo la esperanza de que, alrededor de estas grandes ideas de solidaridad social y de tradición argentina vuelvan a congregarse los hombres de origen racialmente nuestro, en defensa de estas ideas fundamentales que voy exponiendo así, en forma tan deshilvanada.

Aquella ley venía a amparar, señor presidente, —y ésta es una de las cosas que más me entristecen cuando recuerdo aquel error profundo que acaba de señalar,— precisamente, a la masa general de los trabajadores argentinos, porque a ellos especialmente beneficiaba. Recuerden, que fué promulgada en 1923. Los hombres que iban a estar en condiciones de recibir su amparo eran casi todos los hombres envejecidos en el trabajo, con 30 o 40 años de actividad y que, por lo tanto, antes de la invasión, antes que llegaran las oleadas de gente extraña al país, ellos constituían los núcleos de la población realmente argentina. Iban a ser beneficiados por esta ley, no solamente los gremios que aquí se enumeran, sino también los oficios no agremiados: todos los trabajadores del campo, los que recogen las haciendas, los que transportan las cosechas, los que la cargan en los vagones, los que la guardan de las inclemencias del tiempo en los galpones de las estaciones; toda esa clase de gente entraba a gozar de los beneficios de la ley y casi toda esa clase de gente era argentina.

Este era uno de los motivos que me obligaron a defenderla con el calor y con la pasión con que lo hice en aquella época. Aquella ley, como se ve, fué hija de un concepto de solidaridad social, profesado y sostenido y hecho ley, antes que nadie, por los representantes de lo que con tanta inconciencia como petulancia, se ha dado en llamar la política criolla. Aunque más no fuera que por el calificativo me honro en ser uno de sus representantes. Muy bien, señor presidente, ¿con qué se la pretende substituir? Se ha substituído ya parte de su articulado generoso con esa ley llamada de despido, que es una ley de clase, que es una ley que establece un antagonismo entre el patrón y su empleado, haciendo con esta caracterización que sea imposible aquella armonía, aquella fraternidad a que nosotros hemos asistido y que era la característica del comercio, de la industria y del trabajo argentinos.

En los medios en que he actuado, cuando no existían esas leyes que llamaré de clase, he podido contemplar y ser testigo de la armonía entre el capital y el trabajo, en la ciudad de Rosario, donde he pasado la mayor parte de mi vida, y en Córdoba. El régimen del comercio, regido por las leyes morales de la buena fe, de la caballerosidad, por la tradición espiritualista de los que lo componían era el siguiente: un hombre entraba desde los puestos más humildes, barriendo los escritorios, a cualquier casa de comercio de las importantes de aquella épo-

ca, y si tenía condiciones de disciplina, de honradez, de abnegación por el trabajo, ese hombre estaba destinado, en el régimen abierto que tenía el comercio —parecido al de las corporaciones de la Edad Media— a llegar a ser patrón. En el comercio de Rosario yo podría citar de memoria —y pido al Senado que me disculpe porque no quiero ser demasiado extenso— algunos casos, pero no lo haré porque podría olvidar con injusticia algunas de las grandes casas comerciales de las que han salido una, dos o tres generaciones de hombres de fortuna. En cambio, ahora, sin esta armonía, con esta situación que crea al patrón y al obrero la presencia de esa ley que los divide y enfrenta, ese régimen ha sido abandonado con detrimento para todos. Es muy difícil ahora a un hombre que busca trabajo encontrarlo en cualquier comercio o industria, porque el patrón tiene fatalmente que defenderse de la mala fe que la ley parece despertar en los que quiere proteger.

Esta ley no tenía ninguna de esas características; era una ley, como digo, de armonía y de paz social; marcaba quizás el único camino por el que estas sociedades individualistas podían aspirar a subsistir. No hay que olvidarse que en el régimen del dejar hacer y del dejar pasar, la gente que no tiene más medios que sus brazos para producir y sostenerse, es abandonada a las fatalidades sociales, que la única forma de mantener la jerarquía de las clases, que tienen que existir siempre por las condiciones de moralidad, inteligencia, etcétera, indispensable para la marcha del progreso social, es conciliar su existencia con la seguridad que debe tener cada hombre, en una sociedad de esta naturaleza, de su destino económico individual.

Ese recuerdo me lleva a expresar aquí que en el mensaje con que esta ley fuera enviada a la Cámara de Diputados, el presidente Iriyoyen ponía un párrafo que hacía referencia a esta finalidad de la ley, y que a ese párrafo lo he visto citado textualmente por el canciller alemán Hitler sosteniendo una legislación parecida a la ley número 11.289. El señor Hitler decía en su discurso: «que el mal que aqueja a la sociedad moderna se deriva especialmente de la incertidumbre que respecto de su situación económica individual, padecen los hombres que forman parte de los Estados individualistas y liberales.»

Este párrafo es tomado textualmente del mensaje de la ley número 11.289, del año 1918. Ese sería un precedente importantísimo para establecer que nosotros hemos precedido en es-

tos conceptos a toda esa legislación a que hacía referencia el señor miembro informante, en lo que se refiere a la parte de jubilaciones de periodistas.

Tengo que hacerle una observación al miembro informante de la mayoría de la comisión, con respecto a la ley número 11.289, y es que ella no fué derogada, como lo ha expresado el señor senador, fué suspendida y está suspendida. Así lo dice el texto del proyecto de ley que se aprobó aquí en el Senado, y esta suspensión de la ley número 11.289 en pleno funcionamiento, cuando había empezado a recibir las contribuciones de los que estaban comprendidos en sus beneficios, es uno de los aspectos más tristes de aquel episodio.

Como ya la ley de jubilaciones llevaba alrededor de dos años de vigencia y se había organizado su directorio, su presidencia, etcétera, todas las empresas comerciales empezaron a retirar las contribuciones de sus empleados y las de aquellos que protestaban contra la ley, eran depositadas en cuentas especiales en los Bancos. A este objeto elevaron casi todas ellas sus tarifas. Por ejemplo, una empresa naviera que elevó un 15 % sobre las cargas, y eso sólo le produjo alrededor de 2.000.000 de pesos, que los tenía depositados en una cuenta especial cuando se suspendió la ley.

Las empresas periodísticas elevaron los precios de sus avisos y los de las subscripciones. Si mal no recuerdo, de dos pesos por mes que cobraban los grandes diarios, elevaron la subscripción a dos pesos con cincuenta centavos.

Entonces, al suspenderse la ley, esas ganancias ilícitas que resultaban de la elevación de sus tarifas, que todo el mundo soportaba con gusto porque sabía que iban a beneficiar a la masa general de los trabajadores argentinos, continuaban hasta hoy porque esas tarifas no fueron rebajadas jamás.

Por todo eso decía que la suspensión de la ley trajo como consecuencia un beneficio ilícito a las empresas comerciales y periodísticas que entonces la combatieron con tanta saña y con todas las armas arteras que el periodismo suele usar cuando combate una idea que, aunque consulta los intereses generales del país, no es del agrado de los empresarios.

Este es uno de los aspectos que me obligan por lo menos a recordar con pena aquel error y a pensar que no tendríamos necesidad de estar discutiendo ni de votar este proyecto de ley, que es un privilegio que no debían demandar solos los señores periodistas, que dicen que representan los intereses generales del país y

que se sacrifican por él, sino que debían hacer como hicieron los gráficos cuando la derogación de la ley número 11.289.

Cuando la derogación de la ley número 11.289, los obreros gráficos y los obreros de las empresas marítimas fueron solicitados para que dieran su consentimiento a la formación de una Caja especial, porque se argüía que la ley número 11.289 no tenía fundamentos económicos y que por la organización más limitada de las empresas marítimas, era más viable dar una base económica a la organización de la Caja de Jubilaciones Marítimas. Los obreros de ese gremio rechazaron en absoluto esa inclusión y pidieron correr ellos la suerte de los demás gremios a quienes amparaba la ley.

Pero hoy los periodistas se presentan ellos solos a procurar de esta sociedad, a la que tanto mal le hacen la publicidad desenfrenada, envenenada y barata, el amparo a que tendrían derecho, antes que ellos, los gremios de trabajadores argentinos abandonados, olvidados y desamparados desde hace dieciséis años.

Decía, señor presidente, que uno de los motivos que más me determinaron a luchar y a defender esta ley era que ella iba a amparar a los trabajadores auténticamente argentinos y a las masas auténticamente argentinas. En aquella época no dije este pensamiento íntimo, porque hace dieciséis años era un atentado el hablar de la necesidad de proteger y amparar al argentino nativo, no de ampararlo con la caridad, como se puede estilar o pensar, sino ampararlo en su vida, en su trabajo y en su vejez.

La ley número 11.289, fué suspendida en momentos en que se perfilaba la mecanización de la industria agrícola, y los trabajadores auténticamente argentinos, vieron ante ellos, junto con la desocupación pavorosa, la indiferencia del régimen liberal que los abandonaba de nuevo a la fatalidad de su destino, a la angustia de su definitivo desamparo. ¡Caía la ley que ofrecía a sus angustias económicas una ayuda para las necesidades primarias de la vida, ya el dolor de sentirse paria en la tierra propia, no tiene consuelo sino en la muerte!

Nuestro pueblo auténtico, según los nuevos o viejos conductores, no tenía condiciones para afrontar la vida de la civilización moderna. El partido de la Liga del Sur en Santa Fe —traigo este recuerdo—, sobre el cual se fundó después el Partido Demócrata Progresista, hizo de semejante afirmación la bandera de sus reivindicaciones. Hubo momentos en los que la lucha era entre extranjeros demócratas y criollos ra-

dicales y coalicionistas. Estas cosas generalmente no se conocen en los ambientes de Buenos Aires precisamente porque los diarios no se ocupan de ilustrar la opinión con el concepto que el señor senador miembro informante les atribuye, con una orientación destinada a la publicidad verídica y desapasionada, sino que en cuanto apunta alguna idea que sea contraria a la orientación de la empresa comercial que representa el diario, y que debe llevar a los efectos de una mayor ganancia, no tiene ningún reparo en guardar silencio sobre aquella idea o en combatirla con medios arteros y falsos.

Por eso, esto que ha tomado una época en la provincia de Santa Fe y cuyo conocimiento hubiera explicado fenómenos de orden social y político, ha pasado completamente desapercibido en los ambientes de esta ciudad.

Durante más de ocho años esa lucha se ha mantenido. El partido de la Liga del Sur llegó a levantar contra el elemento criollo de la provincia una acción tan formidable, que fué necesario oponerle la coalición de todos los hombres de origen racialmente argentino para vencerlo, y lo conseguimos a duras penas, porque todavía no estaban agotados esos sentimientos de idealidad, ese coraje de la gente criolla, que hoy hemos visto desaparecer casi en todas partes.

Contra el capital, contra el poder ejercido en toda forma por la plutocracia que formaba en la Liga del Sur, toda ella de origen extranjero, nosotros nos hemos batido y conseguimos derrotarlos.

Según las afirmaciones de los conductores políticos del país, de los antiguos y de los nuevos, sobre la tierra empapada con la sangre criolla, fecundada durante siglos por el esfuerzo criollo, idealizada por las delicadezas del alma criolla, debía florecer una civilización agrícola y fabril, necesitándose para ello una nueva clase de población más capacitada por sus condiciones de trabajo, para organizar un gran país de intensa producción, destinado por su potencialidad comercial a pesar en los mercados del mundo.

Para organizar el despojo de la población criolla, se abrieron de par en par las puertas del país, y por ellas se precipitaron oleadas inmigratorias de todos los orígenes y de todos los pueblos del mundo y como en el Asia, las poblaciones adventicias, invitadas y pagadas para incorporarse a la vida de la Nación, se distribuyeron en sus primeros establecimientos, a lo



largo del litoral argentino y en los centros urbanos, especialmente.

La inmigración protegida, amparada y pagada, con ser formidable, no fué tanta como para penetrar desde el principio en el interior del país, y por eso algunas provincias conservaron sus características durante muchos años.

Los cosmopolitas pobladores operaron en frío sobre la generosidad argentina.

Acaba de llegarme la voz vibrante de un joven auténticamente argentino, como si hablaran por ella todos los parias de nuestra raza, diciendo en un arranque emocionado, que esa población adventicia fué la que puso cerco a los campos y tranquera a las estancias. Esa es la verdad: nuestro país, nuestro pueblo ha sido implacable y cobardemente agredido. Como herencia de proscriptos se repartió sus tierras, con avaricia explotaron los campos hasta el extremo de que ya nuestra tierra fértil va transformándose en un inmenso rastrojo, en un estéril desierto sin bosques, sin aguadas, sin pastos, sin cañadas, sin lagunas, sin corrientes de agua, porque los diques van borrando poco a poco hasta los ríos.

Pero las leyes de la naturaleza no se violan en vano, ni en el orden moral el egoísmo puede fundar nada estable por la injusticia que se oculta en la entraña de su acción.

La tierra se venga de los que la explotan sin alma, sin amor, sin piedad por su belleza y castiga los desmanes, el egoísmo contra la población, el problema social del choque de los elementos raciales distintos, divididos por intereses y agrupados alrededor de sus banderas nacionales, que surge, amenazando convertir el país en escenario de luchas inesperadas, que no previeron los extranjerizantes como Sarmiento ni el autor de la frase «gobernar es poblar». Mi adhesión entusiasta a la ley número 11.289, se explica después de lo que he dicho, porque ella venía a aliviar inquietudes casi totalmente argentinas.

He demostrado ya que eran argentinos casi todos aquellos a quienes iba a amparar dicha ley.

No aspiro a que ningún señor senador, ni por motivos de orden personal o político, me acompañe en este desafío, lo respeto a los agentes de un poder perverso e irresponsable, como el que anacrónicamente ejerce la prensa barata, dentro del régimen de derechos y de libertades limitados, bajo el cual fuera organizada la Nación. No me impulsa a hablar en este momento la pasión, sino la renovada tristeza que experimenté, cuando después de memorables

debates, vi caer abatida la ley número 11.289, que como los señores senadores lo recordarán amparaba, junto con los gremios de empleados de comercio, de marítimos, de empleados de la industria, a los periodistas. Aquella ley, que era un gran instrumento de redención humana y de paz social, fué destruida aquí mismo con el apauso de la prensa diaria por una coalición encoquecida de intereses políticos y patronales. De la verdad de esta afirmación, es una prueba proporcionada por los responsables de aquel error, este proyecto, que viene buscando para hacerse efectivo, el auspicio del pensamiento justiciero y generoso, que inspira aquella ley.

Por si acaso la comisión quisiera hacerse cargo, para esa reforma posterior de que ha hablado el señor miembro informante de la mayoría, voy a leerle el artículo pertinente de la ley número 11.289 que incorporaba a los beneficios de la misma, a los patrones, para que fuera un instrumento perfecto de solidaridad social. Dice así: «Pueden adherirse al régimen de la presente ley, los patrones de la industria y del comercio. Las adhesiones deben hacerse dentro de seis meses de sancionada la presente ley o dentro del término de tres cuando se trate de un obrero que pase a ser empleador. El hecho de la adhesión significa reconocer al empleador los derechos que esta ley acuerda a los obreros y empleados a condición de que, además de la contribución señalada para los patrones, concorra a la Caja con el aporte correspondiente al obrero o empleado de más sueldo de los que tiene a su servicio o el que correspondería a la cantidad fijada para sus gastos personales y que figure en sus libros desde cinco años antes de la promulgación de esta ley. Quedan expresamente excluidos de la reforma, los socios comanditarios y los que de cualquier manera reciban intereses o utilidades de los capitales empleados en la industria y el comercio y que otros manejen.»

En lugar de esta legislación solidaria, ya he dicho con qué se la ha substituído.

Uno de los puntos que ha tocado, y en el que tenemos que diferir absolutamente con el señor miembro informante de la mayoría, es el que se refiere a la trascendencia que concede a la prensa diaria en el manejo de los intereses públicos y en la dirección de la opinión de la sociedad o del país donde esa prensa se publique. La prensa doctrinaria, a la cual se ha referido el señor senador, puede decirse que terminó su existencia en un episodio muy doloroso, que quiero recordar al Senado: fué el 22 de julio

de 1836, con la muerte de Armando Carrell. Los detalles de este incidente han sido cuidadosamente ocultados por las empresas de publicidad. La prensa, antes de esa fecha, es cierto que había tenido algunos períodos caracterizados por su intención libelesca, diremos, por su acción pasquinesca en lo que va, de poco antes de la Revolución Francesa hasta el 91 ó 93. En ese lapso se publicaban diarios que eran profundamente procaces, pero tenían siquiera el título o la consideración, aunque sea lejana, de que tras de esos diarios procaces, habían personas que estaban dispuestas a morir: eran las figuras de los que las dirigían. Recuerdo entre ellos a Camilo Desmoulins, Marat, Chaumette y algunos otros.

Pero ese sistema de publicidad agresiva, violenta y desvergonzada, terminó con la caída de Robespierre, el 8 Thermidor, no porque Robespierre fuera partidario de esos excesos; por el contrario, cayó porque no estaba de acuerdo con las doctrinas morales extremistas que representaban el grupo de hombres que lo batiera, que se caracterizaba por la desvergüenza de sus intenciones.

Viene en seguida, hasta el año 1836, el reinado de la prensa doctrinaria, que se manejaba de esta manera: el diario, el periódico o la revista, era sostenido por abonados, por los simpatizantes de la doctrina que esos diarios, periódicos o revistas defendían o difundían, y sostenidos por los partidos políticos afines con esas ideas. Y si el señor senador tuviera curiosidad en conocer estos antecedentes, podría solicitar cualquiera de los números de esos diarios, anteriores al año 1836, y tendría oportunidad de ver que ellos carecen de avisos, que solamente tienen alguna noticia referente a la situación de persona o dirección, pero no publican avisos. Naturalmente, por esa razón, esas publicaciones eran caras, no se vendían al precio de un sueldo por las calles; se pasaban de un afiliado a otro, de un simpatizante a otro, y sin embargo, a pesar de eso, iban conquistando masas de opinión tan importantes y numerosas que les permitían vivir en la holgura y en la decencia. Cualquiera de los redactores de las grandes publicaciones doctrinarias anteriores al año 1836, era muy bien pagado, era mejor pagado que lo que lo son ahora los redactores de los diarios industrializados modernos. Por ejemplo, Armando Carrell, que era director de «El Nacional», tenía a sus órdenes a Alibean y a otro grupo de hombres como redactores; ellos no tenían que preparar sus

artículos de un día para otro; los preparaban con tres días de intervalo y esos redactores ganaban desde 600 a 1.000 francos mensuales y de acuerdo al poder adquisitivo del dinero y régimen de la vida social en Francia, eso era como si ahora un redactor de los grandes diarios industrializados del país percibiera una suma de 2.500 ó 3.000 pesos mensuales, cosa que creo no percibe ninguno que no sea el dueño.

En esta circunstancia es cuando apareció un especulador muy afortunado, de muy oscuro origen social: este especulador se llamaba Emilio de Girardín. Entonces él promueve la reforma del régimen de la prensa, y en lugar de los espacios que la prensa debía destinar a los artículos sobre arte, historia, ciencias, meditados, pensados, completamente afinados en su estilo, algunos de esos artículos y publicaciones todavía son básicos, en ciertos aspectos que se refieren al arte y a la ciencia. Bastaría citar los nombres de los grandes escritores que los redactaron para darse cuenta de lo que son los diarios doctrinarios, y compararlo con el mejor diario grande, serio con que se puede enorgullecer cualquier país.

Entonces, Girardín planteó este sistema de publicidad, diciendo que los espacios destinados a esos temas por el diario, debían ser llenados por la publicidad que pagarían las empresas comerciales, las industrias, las profesiones que se anuncian por dinero y que esas entradas iban a equilibrar el déficit que produciría la venta en las calles del número del diario barato.

Desde ese momento, la prensa había perdido completamente su carácter; pasaba a ser de un sacerdocio, de una tribuna de ideas, lisa y llanamente, una industria cualquiera, con todas las ventajas y desventajas que esta nueva situación le iba a crear.

Como es natural, Armando Carrell salió en defensa de la prensa doctrinaria, y al defender y al anunciar todos estos males que la sociedad actual están recibiendo de esta publicidad vertiginosa y envenenada, era como si pintara en sus artículos de «El Nacional», como si los hubiera escrito ahora, porque ya no tendrá límite, decía él, la exageración y la deformación de la publicidad. Tuvo que ser rozado por una contestación del especulador Emilio Girardín, y eso motivó un duelo. Ese duelo dió por resultado —es emocionante e ilustrativo recordar todo esto en este momento— que el mismo Carrell, que era un hombre de un alma intrépida, de una inteligencia descollante, que había

afrontado todos los grandes peligros de la vida en innumerables lances personales, en la guerra de Africa, cuando apareció el artículo de Girardin en que se lo rozaba, fuera a la redacción del nuevo diario, que se llamaba «La Prensa», el mismo nombre del diario nuestro, a buscar la forma de solucionar una cuestión personal que él veía que se iba a producir. Inmediatamente Girardin hizo llamar a un amigo, Carrell, a otro, —son hombres todos famosos en el periodismo y en la acción en esos años—; Girardin llamó a Latour de Mezeray y Carrell llamó a Alibeu quienes concluyeron el asunto con unas explicaciones que debían publicarse en el diario de Girardin. Este hace la cuestión, como lo hacen los directores de diario actualmente, de que se publique la declaración convenida en los dos diarios a la vez, en «El Nacional» y en «La Prensa». Entonces la moderación de Carrell ya no pudo seguir manteniéndose y él mismo se levantó y dijo: «Soy el ofendido, elijo la pistola». El duelo se realizó del 22 al 23 de julio. Entre en estos detalles porque Armando Carrell es uno de esos espíritus, de esos personajes históricos que uno encuentra, que nos parece que son nuestros amigos, y por los cuales se siente uno ligado por mucha simpatía y admiración. Fué, al duelo lleno de presentimientos; este era un hombre que atravesaba como muchos de los políticos nuestros, uno de esos momentos crepusculares del espíritu. Era republicano pero no estaba contento con su partido. Lo veía infiltrado de elementos extremistas, de elementos que de afuera o de adentro tenían fatalmente que desviarlo de su acción en el día de la crisis que se aproximaba y que era nada menos que la crisis del 48. Nacido para ser jefe de los partidos conservadores, por sus ideas tradicionalistas, por sus condiciones caballerescas, cuando los vió perseguidos y amenazados por las propias fuerzas que habían triunfado con él se retiró sin embargo, porque los sabía supeditados a pasiones groseras y a indiferencias egoístas, y sin ánimo de lucha; de manera que en este estado de desencanto general lo tomó las circunstancias de su duelo y tal vez por eso él fué a ese lance con el presentimiento de su muerte.

Realizado el duelo, los dos duelistas cayeron heridos. La herida de Armando Carrell era mucho más grave que la de Girardin; era en la ingle, había tocado el peritoneo, y puede decirse que desde el momento en que fué llevado a su domicilio, entró en un período de suma grave-

dad. Yo he leído a este propósito el relato que hace un famoso cirujano que lo asistió, un poco por la curiosidad de ver cómo se trataban esos casos y otro poco por la figura del personaje que moría. Julio Cocalet ha destacado esa agonía, que también sorprende por su rareza. Decía que por momentos su espíritu parecía sumergirse en las sombras por largo rato, surgiendo de nuevo y volviéndose a sumergir. Tiene su relato una frase que en realidad es conmovedora, cuando decía: «Me parecía asistir a la lucha del espíritu por desprenderse de los lazos de la materia.»

Carrell falleció del 23 al 24 de julio. Al día siguiente, en «El Nacional» se publicó un artículo que firmaba Luis Blanc, quien era socialista, pero más avanzado que Carrell, que era republicano moderado, y en ese artículo expresaba Luis Blanc palabras que me traen el recuerdo de la actitud del señor diputado Repetto, en el reportaje a que me he referido. Decía que de ahí en adelante la prensa doctrinaria ya tenía su mártir y con él moría, y que la prensa industrializada también tenía su abanderado y con él seguiría el desenvolvimiento de sus aspiraciones ya industriales. Niego entonces a la prensa actual, que se mantiene de los avisos, de la protección de la industria, del comercio, cualquier clase de derecho para aconsejar a los gobiernos las soluciones de los problemas que los circundan. Yo creo que no habrá un hombre que, en el fondo de él, no me acompañe en lo que digo. Pero es tal el temor —no el temor tampoco, porque eso no lo concibo en nadie— es tal la audacia de los que representan este poder, que, por comodidad, es mejor no suscitar sus iras.

Yo estoy acostumbrado a que sobre mi acción, sobre mi nombre, se oye el grito del interés que alguna vez he herido en las posiciones que he desempeñado, pero también mi experiencia me ha enseñado a despreciar esas reacciones del privilegio que, cuando se siente herido en el goce de sus granjerías, no tiene, en realidad, piedad ni por el nombre ni por los antecedentes ni ninguna consideración por la víctima que ha elegido para sus ataques. Industrializada, ha perdido completamente su derecho a manejar la sociedad; y el espectáculo de la forma en que nosotros la vemos producirse a diario, con malignidad, con hipocresía, faltando completamente a la consideración a que tiene derecho la sociedad, el país y las instituciones en que vive, ese espectáculo debía ser suficiente para nosotros para que, como castigo a sus desmanes, no votáramos este pro-

yecto de ley que beneficia a los agentes de ese mal.

Llega a tanto este desmán que yo he asistido desde hace dos meses, por lo menos, con tristeza muy honda, a la actitud de uno de estos diarios sensacionalistas de la tarde, que analiza la labor de los diputados argentinos, clasificándolos, diciendo: éste no sirve; éste no sirve; vale tanto el discurso que ha pronunciado, el proyecto que ha subscrito. Y siendo esto un verdadero ataque a los privilegios parlamentarios, yo no he sentido que, en aquella Cámara ni en ninguna otra parte, se levante una voz para llamar la atención a esas demasías. La intención obscura y maligna está a la vista: es llevar el descrédito sobre los representantes del Congreso argentino, para, juntamente con ellos, llevar también el descrédito al Parlamento y a todas las instituciones del país, por las apreciaciones, inconcidentes o no, que están sirviendo, desde hace muchos años, a la difusión de las ideas disolventes del comunismo ruso. Una de las formas de servir esas ideas es provocar, precisamente, la confusión y el descrédito de las instituciones del país en que se vive; y si nosotros no sabemos oponer una valla a esos desmanes, llegará un momento para este país como el que le ha llegado a España, cuando tuvieron que salir los jefes militares en defensa de las ideas tradicionales de la civilización cristiana amenazadas por un estado de odio y de perturbación en las masas que, precisamente, había sido provocado en ellas por la prédica de esta clase de prensa. ¡Cómo será de peligroso este poder, que en llegando al gobierno, por la razón o por la fuerza, los regímenes políticos que ahora dominan el mundo, la primera medida que toman es aniquilar ese poder! Por ejemplo, la prensa libre, como nosotros la soportamos en el país, no existe casi en ninguna parte del mundo, ni en ningún país de gobierno dictatorial ni en ningún país de democracia limitada. En Italia, al establecerse el régimen totalitario del señor Mussolini, se ordenó a la prensa que no podía expresarse en contra de los intereses del régimen. Y yo pregunto: ¿Cuál es la publicación que en Italia se atreve a pronunciarse en contra de esta notificación de dictador? Ninguna. No es Italia, a pesar de su régimen totalitario, un país no civilizado; es un país de los que marchan a la cabeza de la civilización, y no necesita para desenvolverse este mal de la prensa libre.

Si pasamos a Alemania la situación es exactamente igual; en este país no existe sino la prensa que sirve a los intereses del régimen allí

imperante. Hay alguna ligera diferencia entre la situación de la prensa alemana y la de la prensa italiana, diferencia que se ha borrado en estos últimos años: la diferencia consistía en que la prensa alemana que sirve al régimen imperante allí, cuando recibe un artículo que no se ajusta completamente a la doctrina social y política imperante, debe ser firmado. En las cuestiones internacionales eso también rige en la prensa italiana, y a los que se permite publicar esos artículos son hombres que están vinculados directamente a los designios exteriores del dictador italiano.

Si observamos a Rusia, este país, para los extremistas de todas las naciones del mundo, tendría que haber sido la democracia perfecta, porque es el gobierno totalitario en el sentido de que la clase burguesa ha sido aniquilada o desalojada completamente de casi todas las posiciones. Se le ha permitido vivir un poco después, cuando el régimen soviético tuvo que reconocer que no podía crear una sociedad mecanizada sin resortes morales, como lo pretendía al principio, y que se necesitan estas cosas misteriosas que congregan a la gente, que la consuelan, que la distraen de las situaciones reales de la vida. Cuando se permitió el culto religioso de nuevo, también se infiltró por ahí el régimen de la propiedad privada en ciertos distritos. Entonces la clase burguesa que vive actualmente en Rusia es ésa; todo lo demás está disperso, sometido, o ha desaparecido. La prensa en *aquella democracia pura*, la prensa libre, tampoco existe. La primera medida tomada por los dictadores rusos fué la de suprimir la prensa libre.

En Francia y en Inglaterra, que son los países para la generalidad de la gente, y tal vez tengan razón, de expresión mejor de democracia limitada, con motivo de la defensa nacional, tan grave es el peligro que la prensa ofrece con sus indiscreciones y con sus finalidades, que toda información que se refiere a ese capítulo, o que el gobierno interprete que puede aplicarse o referirse a la defensa del país, está absolutamente prohibida y cualquiera de los periódicos que quiera dar alguna información que toque la parte de la política exterior del país, es inmediatamente suprimido o multado.

Por ejemplo, el caso de la Cámara de Diputados, que yo acabo de presentar, no sería tolerado en Francia. La alteración de las versiones de lo que aquí se dice, en el recinto de las Cámaras legislativas, como tan a menudo lo

hacen los diarios a su capricho o a su antojo, tampoco podría ser permitido en Inglaterra o en Francia, porque hay leyes que penan esas actitudes.

Nosotros hemos visto impasibles de qué manera se deforman los debates y las intenciones, generalmente altas, bondadosas y comprensivas, con que esta Cámara expresa el resultado de su labor.

Yo no me olvido de que, con motivo de las pensiones, he leído indignado algunos comentarios de los diarios sensacionalistas de la tarde, presentando al Honorable Senado como un cuerpo de hombres dispuestos siempre a dar pensiones injustas y por motivos que no se atreven a enunciar. He leído algunos sueltos que decían que de la mesa directiva del Senado se hacían señas a las pensionistas anunciándoles el favor que el cuerpo acababa de discernirles.

¿Y quiénes son las pensionistas que han venido a molestar la atención del Senado, a procurar un poco de justicia ante sus miembros? Son las que vienen en línea directa de los que hicieron y fundaron nuestra nacionalidad, son las pobres y envejecidas por la necesidad, porque una modalidad argentina fué ésa, la de no pensar en el atesoramiento, en ninguna de esas virtudes tan elogiadas por la economía política burguesa, pero que en un régimen de lucha, de dificultades y de estrecheces económicas, fatalmente tenía que producir esta situación de desamparo.

Bien, señor presidente. Con estos conceptos que yo acabo de expresar, sobre la fe que me merece la situación de la prensa industrializada, en la que indudablemente hay escalas, yo no puedo estar de ninguna manera y en ningún momento de acuerdo con esta jubilación que se concede a sus agentes.

Siendo esto así, ¿para qué he de insistir más en otras referencias a que iba a hacer alusión en este debate, si comprendo que hay aquí ya una determinación en favor de este proyecto?

Yo no he tenido ni tengo el deseo de interrumpir el curso de este proyecto y por eso mismo abrevio esta exposición, para que no se piense que quiero ganar un poco de tiempo o que quiero interrumpir siquiera por un día su sanción. Pero me ha parecido que no podía en ninguna forma declinar la responsabilidad de las opiniones que algunas veces he expresado.

Es claro que, como decía el señor miembro informante, háy matices en los diarios que se publican, pero que pudieran calificarse de doctrinarios, casi no tengo nombres que citar al

lado de los colosos que nos deslumbran con sus máquinas y sus millares de números impresos.

Diarios doctrinarios podrían ser los órganos de los partidos políticos militantes; podrían ser los que defienden un ideal determinado y lo confiesan, como «Bandera Argentina», como «El Crisol»; podrían ser los que defienden una política de clase, de persecución al que fuera radicalismo irigoyenista, como es «La Fronda»; podrían ser los que defienden los principios del socialismo marxista, como es «La Vanguardia». Pero los otros, los que viven especialmente de las ganancias o de los recursos que les aporta el aviso de la industria, del comercio y de las profesiones que se anuncian por dinero, como dice Girardin, esos no pueden encajar en la calificación de diarios de doctrina, como el señor senador por San Luis lo ha dicho, porque fatalmente su doctrina tiene que estar perturbada por esta contemplación al movimiento de caja de la administración que es lo que en realidad determina la orientación del diario.

Yo también he sido hombre de gobierno en Santa Fe; allí he desempeñado funciones públicas; conozco a hombres que han estado al frente de situaciones de provincias y de grandes reparticiones, y quisiera llamarlos a cuentas aquí, para preguntarles cuál de los diarios que dicen que representan los intereses generales del país, se ha presentado alguna vez solicitando publicaciones en beneficio de una de esas grandes instituciones del Estado, que no haya sido pagado.

Entonces, quiere decir que estamos frente a una industria, y que esa industria no tiene mejor derecho que las industrias constructivas del país, diré así, para que sus agentes se jubilen, mientras los representantes numerosos y meritorios de aquellas otras industrias permanezcan en el olvido y en el abandono.

Este es el sentido real de mi oposición a este proyecto. Si los periodistas hubieran tenido la sensación de la situación con que vienen a implorar el amparo de una ley que ellos contribuyeron a batur, creo que pensando en la masa inmensa de trabajadores argentinos abandonados y olvidados, no se hubieran atrevido a hacer que se presente este proyecto de privilegio para su gremio.

Otra cosa irritante tiene también este proyecto, que contemplaba la ley número 11.289: me refiero a la exclusión de los obreros gráficos. No había necesidad, en mi concepto, de hacer esa exclusión, porque si se hubiera estudiado esa ley número 11.289 en su verdadero alcance, se habría visto que el hecho de que un obrero participe unos días en el trabajo de una empre-

sa, y otros en el de otra empresa, no lo inhabilita para aspirar a la jubilación.

Por la ley número 11.289 se vinculaba después de 10 años de servicios, casi todas las jubilaciones de previsión social. Además de esa vinculación, en la reglamentación que se proyectaba cuando fué abatida, se contemplaba la situación de los hombres que no desempeñan trabajos continuados en la empresa. Se iba a una estancia y se estimaba de oficio —como lo hace ahora Impuesto a los Réditos—, el resultado económico de la explotación de la misma y cuántos hombres tenían necesidad ese estanciero o hacarero de tener permanentemente en su explotación. No había necesidad de nombrarlos, sino que ese patrón contribuía por un número determinado de obreros. Los gráficos están en esa situación. Cualquier patrón o empresario puede decir: yo utilizo permanentemente tal número de personas en mi empresa. A ese número de hombres va amparando la ley. No le interesa a la ley que se llame fulano o zutano y que tenga o no certificado de trabajo. Nada de eso; el patrón contribuye por los obreros que ocupa.

Cuando un beneficiario de la ley se presentaba, en esas condiciones, bastaba la prueba testimonial recogida en los barrios o en los lugares en que ese hombre había vivido habitualmente. ¿Quién ignora que en cualquier población se sabe, porque se les ve agonizar de vejez, quiénes son los que han desempeñado el oficio de albañil, carpintero, herrero, carrero, etcétera? Nadie ignora esas cosas y menos en los centros pequeños del interior, ni en los barrios mismos de las ciudades, a pesar de lo cambiante de su población. También se puede individualizar perfectamente quiénes son los que han trabajado en tal o cual cosa. No hay que olvidar que ése era el verdadero concepto de la ley. Todo hombre que haya trabajado 30 años en tareas útiles y en beneficio de la sociedad, tiene derecho a un retiro que será igual al 80 % de lo que ganaba en su época activa de trabajo.

Bueno, señor presidente, no quiero entrar en algunos recuerdos de esta ley y de los procedimientos que se emplearon para derogarla, porque temo que ese recuerdo me apasione y me haga decir cosas inconvenientes tal vez, a mis años y a esta altura de mi vida y de este debate, en el que he participado por ser leal a mis convicciones y por desafiar a ese poder irresponsable, al que tanto se teme.

Voy a dar lectura de dos párrafos que condensan más o menos, para quien sepa comprenderlos, cuál ha sido, invariablemente, mi manera de pensar dentro del partido político en el

que surgió a la vida pública y en los largos años en que serví dentro de las corrientes políticas y sociales que yo creí debíamos estimular, difundir y predicar desde las filas de la Concordancia.

Hago la enumeración de las ideas sociales y políticas que ya he expresado, así como la de la vinculación que esas ideas tienen con la filosofía espiritualista que yo profeso, con las ideas científicas que se ligan también con esos conocimientos; y digo, para terminar, que, si esas ideas triunfan y se imponen a la conciencia de las masas partidarias, como lo espero, si logran vencer los peligros interiores que las amenazan y que están ocultos tras mentidas abnegaciones, nuestra historia, al par que la historia humana, tomará sentido y nuestra agrupación política habrá sido la primera en el mundo que haya obtenido el concurso de todas las fuerzas sociales para procurar la redención del hombre dentro de los preceptos de una filosofía sentimental y altruista, y sobre la firme base de la ciencia, libre de los intereses inferiores, que suelen mezclar a su pureza las camarillas que se creen sus inmutables depositarias! Repito que si estas ideas triunfan, nuestra historia tomará sentido y su luz profunda iluminará las sendas de nuestros destinos futuros. No será nuestra patria la factoría propicia al pululamiento de los inferiores. Sobre la piedra ensangrentada de su pasado doloroso, absorbiendo la savia de sus viejos núcleos raciales, una civilización generosa florecerá como una creación providencial. En esa nueva forma de vida social, la miseria no asomará su rostro pálido en el banquete del privilegio, y la riqueza, más comprensiva por la comprensión del claro concepto de su función grandiosa en el concierto de la civilización humana, no hará inútil ostentación de su vana fatuidad presente.

Con estas palabras, señor presidente, termino esta impugnación —que me he visto obligado a hacer en forma deshilvanada—, al elocuente y erudito informe del señor miembro informante de la Comisión de Legislación, señor senador por San Luis doctor Landaburu.

**Sr. Landaburu.** — Hago indicación, señor presidente, para pasar a cuarto intermedio hasta la sesión de mañana, a la hora de costumbre.

**Sr. Presidente.** — No habiendo número en la casa, queda levantada la sesión.

—Era la hora 19 y 25.

RAMÓN COLUMBA.  
Director de Taquígrafos